



Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Hble. Sra. Consellera
C/ Castán Tobeñas, 77 - CA90 - Torre 3
València - 46018 (València)

=====
Ref. queja núm. 1702772
=====

Asunto: **Diversidad funcional. Demora revisión de valoración.**

Hble. Sra. Consellera:

Como ya le indicamos, en su escrito inicial de queja, de fecha 15/02/2017, la persona promotora, Dña. (...), manifestaba que el 06/04/2016 presentó solicitud de revisión de discapacidad sin que hasta la fecha la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya resuelto el expediente.

Considerando que la queja reunía los requisitos exigidos por la Ley reguladora de esta institución, fue admitida a trámite. En este sentido y con el objeto de contrastar el escrito de queja, solicitamos un informe a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el 20/02/2017

En fecha 15/06/2017 se recibió el informe solicitado que indicaba lo siguiente:

D^a(...) presentó solicitud de Pensión No contributiva el 10/03/2016.

Desde la Sección de Ayudas y Prestaciones de la Dirección Territorial de Alicante se solicitó el 25/04/2016 al Centro de Evaluación de Discapacitados la valoración de la discapacidad de la interesada, ya que debe alcanzar el 65% para tener derecho a la pensión.

Según los datos que constan en el expediente del Centro de Evaluación de Discapacitados, la interesada tiene un grado de discapacidad de 53%. El 06/04/2016 presentó solicitud para la revisión del grado y el 25/04/2016 se requirió a D^a (...) documentación necesaria para la resolución del expediente.

En la actualidad el expediente se encuentra a la espera de resolver el grado de discapacidad.

Recibido el informe, le dimos traslado del mismo a la persona promotora de la queja el 26/06/2017 al objeto de que, si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, informando que la documentación reclamada por la Conselleria se presentó a través de los servicios sociales municipales.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en https://seu.elsindic.com		
Código de validación: *****	Fecha de registro: 28/11/2017	Página: 1
C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00 Fax 965 93 75 54 www.elsindic.com Correo electrónico: consultas_sindic@gva.es		

Con fecha 11/07/2017 se solicitó por parte del Síndic ampliación de informe a la Consellería en el sentido que el Centro de Evaluación de Discapacitados de la Dirección Territorial de Alicante concretará fecha prevista para resolver el expediente de la persona interesada.

Tras tres requerimientos efectuados el 11/08/2017, 06/09/2017 y el 10/10/2017 no tenido entrada respuesta alguna de la Conselleria a la solicitud de ampliación de informe solicitado por esta institución.

La falta de respuesta de la Conselleria supone ignorar el contenido del artículo 19.1 de la Ley 11/1988, del Síndic de Greuges, que afirma que «Todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Generalitat están obligados a auxiliar al Síndic de Greuges, en sus actuaciones, con carácter prioritario y urgente». Igualmente, el artículo 18.1 indica que «Admitida la queja, el Síndic de Greuges promoverá la oportuna investigación sumaria e informal, para el esclarecimiento de los presupuestos de la misma. En todo caso dará cuenta sustancial de la reclamación al organismo o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurren circunstancias que así lo aconsejen, a juicio del Síndic de Greuges».

En este expediente de queja han transcurrido más de 4 meses desde que nos dirigimos a la Conselleria reclamando dicha información sobre el asunto planteado, por lo que no podemos demorar más la formulación de una Resolución, debiendo atender únicamente a la información que la propia persona interesada nos ha facilitado.

Por tanto, llegados a este punto y tras la detenida lectura del escrito inicial de queja y la documentación que nos remitió la persona interesada, procedemos a resolver la presente queja con los datos obrantes en el expediente.

Pudiendo no ser la actuación descrita lo suficientemente respetuosa con los derechos de la persona dependiente, le ruego que considere los argumentos que, como fundamento de las recomendaciones con las que concluimos, a continuación le expongo.

A la persona solicitante tiene reconocida una discapacidad del 53% según la propia Conselleria.

Presentada la solicitud el 06/04/2016, procede una nueva calificación conforme a lo dispuesto en el artículo 11.b de la Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el ámbito de la Comunitat Valenciana (D.O. Generalitat Valenciana, 27 de noviembre de 2001):

El grado de minusvalía podrá ser objeto de modificación, tras la instrucción del correspondiente procedimiento, en los siguientes supuestos:

b) Cuando hubiera sido reconocido con carácter permanente procederá efectuar una nueva calificación por agravamiento o mejoría, siempre que hayan transcurridos dos años desde la fecha de la anterior calificación

Respecto al plazo máximo para resolver, la referida Orden establece en su artículo 10.2 que:

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que recaiga en el procedimiento regulado en esta Orden será de seis meses, computándose a partir de la fecha de la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

Dicho plazo opera igualmente para los procedimientos de revisión del grado de discapacidad (artículo 14 .1 de la Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social):

El titular de la Dirección Territorial de Bienestar Social y dentro del plazo máximo previsto en el artículo 10.2, dictará y notificará resolución expresa en el procedimiento incoado para revisar el grado de minusvalía.

Debe indicarse que la suspensión o ampliación del plazo para resolver el procedimiento conlleva que, por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se hubiese emitido Resolución de Acuerdo en la que se exponga una motivación clara de las circunstancias concurrentes, que debería haber sido notificado, en todo caso, a las personas interesadas (art. 21, 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En el caso que nos ocupa, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha informado de la concurrencia de causa alguna, de las legalmente reguladas, que pudiera justificar la demora en la resolución del expediente. Por todo ello cabría achacar la demora a la pasividad o inacción de los órganos encargados en la tramitación del expediente.

La reciente Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana, establece, entre otras cuestiones de interés al contenido de la presente queja, las siguientes:

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto definir el concepto de procedimiento de emergencia ciudadana y establecer un conjunto de medidas de carácter urgente y extraordinario eficaces destinadas a:

- Atender las necesidades básicas de las personas, familias, colectivos susceptibles de especial protección como es el caso de las personas menores, las personas mayores y las que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
- (...) Generar mecanismos eficaces que permitan agilizar la tramitación de los procedimientos de emergencia.

Artículo 2. Definición del procedimiento de emergencia ciudadana.

1. Se definen como procedimientos de emergencia ciudadana aquellos destinados al desarrollo de una vida digna y que son gestionados por la administración de la Generalitat, sus organismos autónomos, entidades que la integran y por las administraciones locales cuando intervengan como entidades colaboradoras de la Generalitat.

2. Tendrán consideración de procedimientos de emergencia ciudadana los incluidos en el anexo de la presente ley, así como los que se pudieran establecer en un futuro por razones de interés general mediante ley.

Artículo 3. Tramitación de urgencia del procedimiento

1. Los procedimientos declarados de emergencia ciudadana por razones de interés público establecidos en esta ley se tramitarán con carácter de urgencia. A tal efecto se entienden reducidos a la mitad los plazos máximos establecidos para resolver y notificar el correspondiente procedimiento, salvo para la presentación de solicitudes y recursos.

2. En los procedimientos declarados de emergencia ciudadana de los establecidos en el anexo que reconozcan un derecho subjetivo para sus solicitantes, deberán entenderse estimadas las solicitudes una vez transcurrido el plazo máximo establecido en esta ley, sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente.

Anexo.

Punto 1.h. Procedimientos de obtención del certificado de discapacidad.

Respecto a los efectos del reconocimiento de grado de discapacidad, la Orden de 19 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Bienestar Social, en su artículo 10.4, establece lo siguiente:

El reconocimiento del grado de minusvalía se entenderá producido en la fecha de la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros y lugares contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la demora en resolver el expediente de discapacidad que nos ocupa, se suma la falta de respuesta a esta institución. Según el artículo 24.1 de la Ley reguladora del Síndic de Greuges, «la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Síndic de Greuges (...) podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual», incluso, según el artículo 29.2, «con expresa mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud».

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 y 29.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1998, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, formulamos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas una **ADVERTENCIA** para que se remitan a esta institución en plazo los informes requeridos y que contengan, expresamente, datos actualizados del expediente solicitado. Ante la reiteración de esta falta de colaboración con el Síndic en este o en otros expedientes, esta actitud merecerá ser destacada en la sección correspondiente del Informe anual que esta institución presenta, y llegado el caso se evaluará la posible emisión de un informe especial ante Les Corts Valencianes

Del mismo modo, formulamos las siguientes **RECOMENDACIONES**:

RECOMENDAMOS a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que tras 19 meses de tramitación del expediente, habiendo superado los tres meses que establece la

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: *****

Fecha de registro: 28/11/2017

Página: 4

actual normativa, resuelva urgentemente el expediente de discapacidad y proceda a valorar el grado de las limitaciones de las actividades diarias, abriendo así la posibilidad, si procede, de acceder a los recursos y prestaciones que le correspondan.

RECOMENDAMOS que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/2016 citada, que determina la aprobación de una resolución favorable en virtud del carácter positivo del silencio administrativo, reconozca el derecho al acceso de recursos y prestaciones a las que tuviera derecho la persona a la que se reconoce el grado de discapacidad, desde el 06/04/2016 (fecha de presentación de la solicitud).

Por último creemos necesario **RECORDAR** a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la obligación legal de resolver en plazo, dado que el no cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas con diversidad funcional y sus familias, en un momento de dificultades económicas como es el actual.

Le agradecemos que nos remita, en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de las recomendaciones y del recordatorio que le realizamos o, en su caso, las razones que estime para no aceptarlas.

Para su conocimiento, le hacemos saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, esta se insertará en la página web de la institución.

Atentamente,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana